

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 560

15 de junio de 2010

Presentada por el señor *Seilhamer Rodríguez*

Referida a las Comisiones de Urbanismo e Infraestructura; y de Hacienda

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar a la Administración de Terrenos (AT) a realizar las obras contenidas en el Capítulo VI- Programa de Proyectos de Inversión Certificados del Plan de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, el Gobierno de Puerto Rico creó una herramienta para “*otorgar a los municipios el máximo posible de autonomía y proveerles las herramientas financieras y los poderes y facultades necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico.*” El Municipio de Ponce se acogió a lo establecido en esta Ley, convirtiéndose en el primer Municipio Autónomo de Puerto Rico.

Para el año 1992, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 81, *supra*, el Municipio de Ponce elaboró su Plan de Ordenación Territorial en coordinación con varias entidades gubernamentales. Luego de aprobado y adoptado el Plan de Ordenación Territorial, el Municipio suscribió un acuerdo con varias instrumentalidades gubernamentales. El acuerdo, titulado “Convenio para el Desarrollo de Proyectos Programados entre el Gobierno Central y el Municipio de Ponce”, detalla los millonarios proyectos de “Ponce en Marcha” que se realizarían para fines del programa de obras del Plan de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce.

El Plan de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce fue revisado en el año 2003, siendo el mismo aprobado por la Junta de Planificación, mediante la Resolución Núm. JP-PT-63-RI-01 del 18 de diciembre de 2003, y refrendado por la entonces Gobernadora de Puerto

Rico, Hon. Sila M. Calderón, en el Orden Ejecutiva OE-2003-79 del 28 de diciembre de 2003. Como parte de esta revisión, la Administración de Terrenos (AT) suscribió una serie de obras incorporadas en el Programa de Nuevos Proyectos de Inversión Certificados para el Municipio Autónomo de Ponce.

A tenor con la debida revisión al Plan de Ordenación Territorial de Ponce, las obras actualmente contenidas en el “Programa de Acción” contiene obras del programa de “Ponce en Marcha”, obras en apoyo al Puerto de Las Américas y obras de mejoras a la ciudad independientes de las antes mencionadas.

Entre las obras de inversión certificadas que la Administración de Terrenos (AT) tiene programadas para realizar se encuentran: 1) Multeado Estrella: Avenida Colectora de cuatro (4) carriles, Avenida de cuatro (4) carriles en borde del Río Bucaná, Avenida Comercial de cuatro (4) carriles con estacionamientos, conexiones futuras bajo la PR-52 y sobre el Río Bucaná, Trazado de calles interiores; y 2) Riberas de Bucaná: calle principal de cuatro (4) carriles y ampliación de calle marginal mediante la construcción de una nueva calle de cuatro (4) carriles.

La Administración de Terrenos (AT) está obligado a realizar las obras antes señaladas, al amparo del Artículo 13.011 de la Ley Núm. 81, *supra*, que dispone:

“Artículo 13.011 Conformidad y Compatibilidad de los Planes de Ordenación

...

Una vez aprobado por el Gobernador, el Plan de Ordenación obligará a las agencias públicas al cumplimiento con los programas de obras y proyectos incluidos en la Sección del Programa de Proyectos de Inversión certificados por las agencias públicas. La Junta de Planificación le dará consideración prioritaria a dicha sección en la preparación de su Programa de Inversiones de Cuatro Años dispuesto en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, igualmente lo hará la Oficina de Presupuesto y Gerencia en el Presupuesto Anual que se someta a la Asamblea Legislativa. Las corporaciones públicas quedarán obligadas en sus propios presupuestos”.

El 21 de abril de 2010, el Hon. Guillermo A. Somoza Colombini, Secretario de Justicia, emitió su opinión en relación a la Consulta Núm. 10-272-A. Esta consulta está dirigida a determinar que tan vinculante es la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras et als, 153 D.P.R. 1 (2000), así como las obligaciones que la misma genera en las entidades gubernamentales. En relación al

trasfondo fáctico y procesal, señala que el “caso comenzó por una demanda que instó el Municipio de Ponce (“Municipio”) contra varias agencias y coporaciones públicas por incumplir con el convenio suscrito con el Municipio para implementar un Plan de Ordenación Territorial. Dicho Convenio contemplaba el desarrollo de proyectos programados entre el Gobierno central y el Municipio”. En su opinión, el Secretario concluye que “es una final y firme, la misma constituye cosa juzgada. Por lo tanto, solamente resta que las partes desfavorecidas por el dictamen, cumplan con las obligaciones que éste le impone”, y presenta una serie de alternativas para que las agencias y corporaciones cumplan con la misma. Entre las recomendaciones esbozadas para atender la situación, se encuentran: “1) crear una línea de crédito a través de la Legislatura como se hizo en el 2001; 2) que cada agencia concernida solicite en su propio presupuesto una partida para realizar el pago del desarrollo comprometido; 3) negociar un acuerdo transaccional.” Siguiendo las recomendaciones del Secretario de Justicia, es pertinente señalar que el inciso (m) del Artículo 7 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Terrenos de Puerto Rico” dispone que:

m. Tomar dinero a préstamo, dar garantías, emitir bonos par cualquiera de sus fines corporativos o con el propósito de consolidar, restituir, pagar, o liquidar cualesquiera bonos u obligaciones en circulación, emitido o asumidos por ella, y garantizar el pago de sus bonos y de todas y cualesquiera de sus otras obligaciones mediante la pignoración, hipoteca, o cualquier otro gravamen sobre todos o cualesquiera de sus contratos, rentas, ingresos o propiedades;

Como se puede apreciar, la Ley Núm. 13, *supra*, ya cuenta con un mecanismo que permite a la Administración de Terrenos (AT) atender los compromisos contraídos.

Ante la importancia que representan estos proyectos para el progreso del Municipio Autónomo de Ponce la culminación de esta obra y la obligación legal contraída por la Administración de Terrenos (AT), esta Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio ordenar a la Administración de Terrenos (AT) realizar las obras contenidas en el Capítulo VI- Programa de Proyectos de Inversión Certificados del Plan de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Administración de Terrenos (AT) realizar las obras
2 contenidas en el Capítulo VI- Programa de Proyectos de Inversión Certificados del Plan de
3 Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce.

4 Sección 2.- La Administración de Terrenos (AT) realizará en el Municipio Autónomo
5 de Ponce las siguientes obras: : 1) Multeado Estrella: Avenida Colectora de cuatro (4)
6 carriles, Avenida de cuatro (4) carriles en borde del Río Bucaná, Avenida Comercial de
7 cuatro (4) carriles con estacionamientos, conexiones futuras bajo la PR-52 y sobre el Río
8 Bucaná, Trazado de calles interiores; y 2) Riberas de Bucaná: calle principal de cuatro (4)
9 carriles y ampliación de calle marginal mediante la construcción de una nueva calle de
10 cuatro (4) carriles.

11 Sección 3.- Se autoriza a la Administración de Terrenos (AT) contratar con
12 cualesquiera entidad privada, así como con cualquier departamento, agencia o
13 instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de la obra a que se refiere la
14 Sección 2 de esta Resolución Conjunta.

15 Sección 4.- La Administración de Terrenos (AT) deberá identificar los fondos que sean
16 necesarios para cumplir con los propósitos de esta Resolución Conjunta.

17 Sección 5.- Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de
18 cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Estatal del Gobierno de Puerto Rico para ser
19 aplicados a sufragar el costo de las obras públicas que se autorizan a desarrollar.

20 Sección 6.- Las cantidades separadas para la construcción de las obras ordenadas en
21 esta Resolución Conjunta podrán ser pareadas con fondos municipales, estatales y/o
22 federales.

- 1 Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su
- 2 aprobación